



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
 Radicación: 05001-31-05-008-2021-0555-01
 Demandante: Carlos Alberto Echeverry Vásquez
 Demandado: Municipio de Medellín
 Asunto: Apelación sentencia
 Procedencia: Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín
 Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
 Temas: Pensión jubilación convencional

Medellín, febrero veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de octubre de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor CARLOS ALBERTO ECHEVERRY VÁSQUEZ en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Radicado 05001-31-05-008-2021-00555-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor CARLOS ALBERTO ECHEVERRY VÁSQUEZ, convocó a juicio laboral al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, pretendiendo se declare que le asiste el derecho a la pensión de jubilación consagrada en la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003, que ha regido las relaciones laborales en el ente territorial demandado; en consecuencia se condene al Municipio de Medellín, a reconocer dicha pensión de manera retroactiva desde la causación el derecho, con el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de la fecha de causación y exigibilidad de la pensión de jubilación, hasta el pago efectivo y la indexación de las condenas.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que el accionante ha prestado sus servicios personales en el Municipio de Medellín desde el 23 de diciembre de 1987, ha desempeñado el cargo de trabajador oficial, obrero de vías; cumplió 20 años de servicio en la entidad demandada antes del 31 de julio de 2010, actualmente devenga un salario de \$2.417.889; que en el Municipio de Medellín opera una organización sindical de empresa denominada SINTRAMUMED, y entre ésta y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN se han suscrito varias convenciones colectivas de trabajo que regularon la pensión de jubilación en los años 1978, 1979, 1980 y 1985; que el actor se afilió a la organización sindical SINTRAMUMED el 23 de septiembre de 1988, paga la cuota sindical y ha sido beneficiario de convención; que la convención colectiva de trabajo celebrada entre SINTRAMUMED y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN para la vigencia 2001-2003 fue suscrita el 19 de agosto de 2003 y en los artículos 71 y 74, consagra el derecho a la pensión de jubilación *“para los trabajadores oficiales en los siguientes casos especiales: a.. Cuando hubiere laborado a su servicio durante veinticinco (25) años continuos o discontinuos, cualquiera sea la edad del trabajador. b. Cuando cumpla veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos cualquiera que sea la edad, siempre que haya estado dedicado a labores que se realicen a temperaturas anormales, en socavones o en condiciones insalubres”*, agrega que en el

artículo 74 de la misma convención, se establece que *“el listado de oficios considerando insalubres para efectos de jornada de trabajo o jubilación especiales, según lo establecido en Convenciones Colectivas vigentes, se aplicará sin perjuicio de las conclusiones del estudio referido en la presente Cláusula al personal vinculado antes de la firma de la Convención colectiva de Trabajo 1985-1986 se le aplicará en lo pertinente, las disposiciones de Convención anteriores vigentes en materia de jubilación, cualesquiera que sean los resultados de dicho estudio.”*, aduce que, igualmente, se dispuso que el Comité de Seguridad Industrial, en el término de noventa (90) días, contados a partir de la firma de Convención, hará un estudio para determinar si los oficios que se realizan con fogones de ACPM, en el Cementerio Universal, en la Carpintería Municipal, Lubricadores, Pintores a Pistola, trabajos en Pavimentos y trabajos de aseo, son insalubres, para efectos de la jubilación especial de que tratan los literales b) y c) de la cláusula 6 del Decreto 074 de 1980 y si no lo hicieren en dicho término se considerarán insalubres. (Clausula 4. Convención colectiva 1981-1982).”; asegura que hasta el momento el Comité de Seguridad Industrial al que hace referencia el artículo 74, no ha definido los trabajos realizados en condiciones insalubres, en socavones y a temperaturas anormales, en consecuencia, todas las actividades se consideran insalubres.

Expone que con posterioridad a la firma de la anterior convención las partes suscribieron lo que denominaron “acta de cierre”, pero en ellas no modificaron la norma que regula el beneficio de la jubilación, que la última “acta de cierre” celebrada entre las partes se suscribió el 14 de octubre de 2008 y que la convención colectiva de trabajo suscrita entre SINTRAMUMED y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN para la vigencia 2001-2003 se encuentra vigente en lo que respecta al beneficio de pensión de jubilación.

1.2.- CONTESTACIÓN

El **MUNICIPIO DE MEDELLIN**, una vez notificado del auto admisorio del libelo incoativo de la demanda, replicó el mismo, aceptando como cierto los extremos de la relación laboral, el cargo, la calidad de trabajador oficial, el

cumplimiento de 20 años de servicio antes del 31 de julio de 2010, la existencia del sindicato y la suscripción de varias convenciones colectivas de trabajo, desconoce la fecha de afiliación al sindicato, pero acepta que el accionante es beneficiario de la convención colectiva, precisando que no se cumplen las condiciones para darle aplicación a ninguna convención colectiva como fuente de derecho, toda vez que la última convención que trató el tema de jubilación fue la correspondiente a la vigencia 1985 – 1986, convención que limitó el beneficio pensional a los trabajadores que venían vinculados con anterioridad a la firma de la misma. Luego, teniendo presente que el demandante ingresó a la entidad con posterioridad a la firma de dicha convención colectiva, no estaba dentro de dichos postulados, además, las convenciones posteriores no se ocuparon del tema pensional, incluyendo la convención colectiva para la vigencia 2001 – 2003.

Argumenta que esta última convención, realmente corresponde a la recopilación de normas convencionales y no reporta en su cuerpo fecha de suscripción, por lo tanto, adolece de las formalidades de ley que consagra el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, razón por la cual no produce efectos jurídicos, pues es imposible contabilizar el término de los noventa días para realizar el estudio que trae el mencionado artículo 74, toda vez que se desconoce desde que momento se debe iniciar el conteo y no cumple con el depósito oportuno ante el Ministerio del Trabajo, requisito “sine qua non”, exigido por el artículo 469 del CST, para que se le derivaran efectos jurídicos.

Argumenta que no es cierto que todas las actividades desarrolladas por los trabajadores oficiales se consideran insalubres como lo expresa el demandante, como se puede ver, lo cierto es que solo los oficios de coberturas, pavimentos, operadores de vector y saneamiento ambiental ostentaban tal calidad, haciendo énfasis en que solo se aplicaría a los trabajadores vinculados antes de la firma de la convención colectiva 1985-1986.

Acepta como cierto que la entidad territorial suscribió las convenciones colectivas de trabajo 1978, 1979, 1980, 1985, no obstante, el demandante se regía, en materia pensional, por las normas legales vigentes, Ley 6ª de 1945 y Ley 4ª de 1966, la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993, toda vez que se vinculó al Municipio de Medellín con posterioridad a la firma de la convención 1985 – 1986.

Para enervar las pretensiones propone las excepciones que denominó: Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales; incapacidad o indebida representación del demandante; falta de requisitos de la demanda; inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión especial de jubilación de convención colectiva de trabajo; prohibición constitucional de otorgar pensiones especiales de pactos o convenciones colectivas de trabajo; prescripción; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; buena fe del Municipio de Medellín; Imposibilidad de condena en costas y la excepción innominada.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia mediante fallo proferido el 24 de octubre de 2022, por medio del cual absolvió al Municipio de Medellín de todas las pretensiones invocadas en la demanda formulada por el señor CARLOS ALBERTO ECHVERRI VELÁSQUEZ; declaró probada la excepción de Inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión especial de jubilación de convención colectiva de trabajo propuesta por el Municipio de Medellín y condenó en costas a la parte demandante.

1.4.- RECURSO DE APELACION

El apoderado de la activa interpone el recurso de apelación el cual sustenta en que lo pretendido en el proceso no es el reconocimiento de una pensión que vaya más allá de la fecha que estableció el acto legislativo 01 de 2005, pues la convención colectiva que contiene el derecho debatido es vinculante y la misma se encuentra vigente, así las partes lo han aceptado y el mismo Municipio la ha aplicado, afirma que existen sentencias de la Corte Suprema de Justicia que reconocen pensiones convencionales establecidas en la Convención Colectiva 2001-2003, tales como las sentencias SL117, SL1160, SL4093 de 2020, enfatizando que la convención es autónoma y no se puede entender como una recopilación de otras convenciones, cuando la misma está reconocida como independiente y en aras de discusión, la demandada en prueba por informe, en la pregunta número uno, indica que se trata de una recopilación de las normas vigentes dentro de las cuales acepta la vigencia de los artículos 71 y 74 y no se puede entender que si no se trató el tema en las convenciones posteriores tales normas salen del ordenamiento jurídico, pues conforme al Código Sustantivo de Trabajo la convención se prorroga cada seis meses hasta la fecha establecida por el acto legislativo 01 de 2005.

Anota que, si bien se afirmó por la a quo que no se cumplió la fecha de registro de la convención dentro de los 15 días, lo importante es que se efectuó el depósito y así lo ha dicho la Corte en sentencia SL3345 de 2020, razón por la cual invita a tener en cuenta más el sentido de la norma que el formalismo excesivo.

Finalmente, solicita se haga un estudio juicioso y el análisis de acuerdo con los principios constitucionales y la línea jurisprudencial de la Corte para revocar la sentencia.

1.5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos se pronunció el apoderado de la parte accionante, solicitando la revocatoria de la decisión, argumentando la vigencia de la norma convencional conforme a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las SL 2802-2018, SL526 del 2018, SL 4550 2018, SL 2661 2019, SL 3280 del 2019, SL 4131 del 2020, SL 3343 del 2020, SL 3635 de 2020, SL 4650 del 2020, SL 4138 del 2020 SL 3343 del 2020, SL 4131 del 2020, SL2398-2021, asimismo, refiere que la aplicación de la garantía del derecho a la negociación colectiva supone que frente a cualquier duda interpretativa se aplica la favorabilidad (art. 53 CP) entendiendo que después del 31 de julio de 2010 ya no podrán aplicarse ni disponerse reglas pensionales en los pactos y convenciones colectivas, salvo los existentes antes de la entrada vigencia del acto legislativo que estipularán como término una fecha posterior; igualmente solicita tener en cuenta que la primera recomendación del Comité de Libertad Sindical de la OIT es que los convenios anteriormente negociados deberían continuar conservando todos sus efectos, incluidos los relativos a las cláusulas sobre pensiones, hasta su fecha de vencimiento, aunque ésta sea después del 31 de julio de 2010.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Se encuentra que no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos, los cuales fueron aceptados desde la contestación de la demanda, y fijados en el litigio.

- Que el señor CARLOS ALBERTO ECHEVERRI VELASQUEZ, nació el 20 de junio de 1963, como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía, obrante a folios 17 del anexo *01.DemandaPoderAnexos.pdf*
- Que el accionante es trabajador oficial adscrito al Municipio de Medellín, en el cargo de obrero de vía, con fecha de ingreso el 23 de diciembre de 1987, tal como se acredita con el certificado de vinculación laboral obrante a folios 18 del anexo 01.
- Que el señor ECHEVERRI VELASQUEZ está afiliado al Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín, desde el 23 de septiembre de 1988 y es beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el sindicato y el Municipio de Medellín, véase certificación obrante a folios 19 ibidem.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia objeto de apelación para reconocer la pensión de jubilación convencional al gestor del proceso, con fundamento en el literal b) del artículo 71 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003?

¿Si la Convención Colectiva 2001-2003 es una verdadera norma convencional o si se trata de una recopilación normativa de las normas convencionales

vigentes, de igual forma establecer si la convención cumplió con los requisitos de forma establecidos en el artículo 469 del Código Sustantivo de Trabajo?

¿Si el demandante acredita los requisitos convencionales para ser beneficiario de la prestación, 20 años de servicio en el desempeño de un cargo de exposición a temperaturas anormales, en socavones o en condiciones insalubres?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual i) la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003, suscrita por el Municipio de Medellín y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín SINTRA MUMED, es una norma autónoma e independiente ii) La convención no tiene la fecha en la cual fue firmada, por lo tanto, no es posible establecer si fue depositada dentro del término legal y en consecuencia no produce efectos jurídicos. iii) Al demandante no le es aplicable la Convención Colectiva 1980, adoptada mediante el Decreto 074 de 1980, porque su vinculación con el ente territorial es posterior a la Convención Colectiva de 1985, partir de la cual la pensión de jubilación de los servidores municipales se rige por las normas legales. En consecuencia, la sentencia debe ser **CONFIRMADA**, como se pasa a explicar.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

2.5.1. El derecho a la negociación colectiva

El derecho a la negociación colectiva es un derecho constitucional que hace parte del núcleo esencial del derecho al trabajo y a la asociación y libertad sindical

Es así como el artículo 55 de la Constitución Política reconoce el derecho a la negociación colectiva en escenario del trabajo, al disponer se *“garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley, por lo tanto, es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos de trabajo”*

Para la OIT, la negociación colectiva es un principio básico de la organización, al ser el mecanismo idóneo para que los trabajadores, los empleadores, y sus organizaciones, alcancen un acuerdo sobre cuestiones relativas al empleo, por lo tanto los Estados deben promoverla y garantizarla, derecho regulado en el Convenio 098 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (Ley 27 de 1976) y el Convenio 154 de 1981 (Ley 524 de 1999), sobre negociación colectiva, a su vez especificado mediante la Recomendación 163 de 1981.

2.5.2. Fuerza normativa de la convención colectiva de trabajo

De conformidad con lo previsto en el artículo 465 del Código Sustantivo de Trabajo, si se llegare a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva, que se convierte en fuente autónoma de derechos.

El artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, define la convención colectiva de trabajo como aquella que *“se celebra entre uno o varios {empleadores} o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o 24 federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”*.

En los anteriores términos las normas convencionales son fuente formal y material del derecho, vinculante para las partes *“Al ser, pues, el contrato colectivo un acto regla, producto de la autonomía y la voluntad, mediante el cual sus suscriptores dictan lo que será la ley de la empresa, sus disposiciones constituyen verdadero derecho*

objetivo, que se proyecta e incorpora a los 31 contratos individuales de trabajo para regular temas como el salario, la jornada, las prestaciones sociales, las vacaciones, etc., como también para erigir reglas en materia de empleo y gobierno de relaciones empresa y organizaciones de trabajadores. De ahí que la convención colectiva de trabajo haya sido reconocida por antonomasia como una fuente autónoma de derecho, en tanto que, a la par con la ley, los reglamentos, el laudo arbitral y otras normas laborales, establece derechos, obligaciones, deberes y facultades de los sujetos de la relación de trabajo.” (SL16811-2017)

En este mismo sentido la Corte Constitucional en sentencia SU-245 de 2015, resaltó “ *El elemento normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las relaciones de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se establecen anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán las condiciones individuales para la prestación de los servicios, esto es, los contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad de los trabajadores, las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad social, cultural o recreacional.*”

Y en la sentencia SU-267 de 2019, la misma Corporación fijó como pauta interpretativa de la convención colectiva de trabajo el principio de favorabilidad de interpretación, previsto en el artículo 53 del ordenamiento superior.

2.5.3. Alcance del acto legislativo 01 de 2005 respecto a la vigencia de las reglas pensionales convencionales con posterioridad al 31 de julio de 2005

Es menester precisar que con la reforma introducida al artículo 48 de la Carta Política, por el parágrafo 3° del acto Legislativo 01 de 2005, se restringe el ámbito de la negociación colectiva en materia pensional.

La reforma constitucional comporta la pérdida de vigencia las normas convencionales que fijan reglas pensionales diferentes a las consignadas en el Sistema General de Pensiones, dejando a salvo los derechos adquiridos mientras esas reglas pensionales tuvieron vigencia, así lo ha entendido la Sala Laboral de la Corte suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias CSJ SL, Radicado 29907 de 2008, CSJ SL Radicado 34044 de 2009, SL, Radicado del 24 de abril 2012, CSJ SL13267-2016, SL12498-2017 (49768) de 2017 y SL-14282 (63413) de 2018.

Ahora bien, la Corte ha precisado que el parágrafo tercero del acto legislativo 01 de 2005, señaló que tales normas internas “*se mantendrán por el término inicialmente estipulado*” y por lo tanto es posible que ese plazo inicial pueda extenderse más allá del 31 de julio de 2010, siempre que la convención o pacto se haya celebrado con anterioridad a la expedición del acto legislativo 01 de 2005.

En ese ejercicio de armonización de las expresiones “*se mantendrán por el termino inicialmente estipulado*” y en “*todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010*”, se admite que el parágrafo 3 del artículo 48 de la Constitución Política, permite la aplicación de los derechos pensiones convencionales por el plazo inicialmente establecido por las partes y que debe entenderse que cuando se trata de prórrogas, son éstas las que, en todo caso, perderán vigencia al 31 de julio de 2010.

La misma línea de pensamiento se consigna en las recientes sentencias SL2798 y SL2543 del 15 de julio de 2020, en las cuales la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisó y amplió la línea jurisprudencial en relación con la incidencia de las prórrogas automáticas de la convención. respecto al término inicialmente pactado.

Ello acompasa con la sentencia SU 555 de 2014, proferida por la Corte Constitucional en la se estudia el acto legislativo 01 de 2005, de cara al acatamiento de las recomendaciones impartidas por la OIT a Colombia, concluyendo que las misma son compatibles con la reforma constitucional y no han sido incumplidas por el Estado Colombiano.

En todo caso, el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral, ha señalado que las reglas pensionales vigentes con anterioridad al acto 01 de 2005, expiraron a partir del 31 de julio de 2010, lo cual no comporta el desconocimientos de los derechos adquiridos: “ *la pérdida de vigencia de las reglas de carácter pensional contenidas en convenciones colectivas de trabajo, en pactos colectivos de trabajo, en laudos arbitrales y en acuerdos válidamente celebrados, no comporta la pérdida de los derechos válidamente adquiridos mientras esas reglas estuvieron en vigor. Dicho de otra manera: los derechos adquiridos legítimamente continúan en cabeza de sus titulares, siguen formando parte de su patrimonio, así los actos jurídicos, a cuyo abrigo nacieron, hubiesen desaparecido del mundo jurídico.* (SL Radicado 29907 de 2008)

En el sublite, el derecho reclamado se causaría al 23 de diciembre de 2007, con veinte años de servicio y para trabajos a temperaturas anormales en socavones o en condiciones insalubres, literal b) del artículo 71 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003, esto es con anterioridad al 31 de julio de 2010, razón por la cual se estudia un derecho adquirido que no está afectado por el acto legislativo 01 de 2005.

2.5.4. Antecedentes jurisprudencias sobre la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003

Siendo uno de los aspectos principales en los que está cimentada la apelación conviene reseñar algunas de las decisiones que sobre la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003, suscrita por SINTRAMUMED y el Municipio de Medellín, ha emitido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

RADICACIÓN	FECHA DE VINCULACION A LA ENTIDAD TERRITORIAL	SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
SL 3045 de 2019	El trabajador ingresó el 21 de septiembre de 1988, acreditando 20 años de servicios	<p>Reconocimiento de la pensión convencional conforme al literal b) del artículo 71 de la Convención colectiva2001-2003, que incorporó la pensión de jubilación sin ningún tipo de restricción temporal.</p> <p>Presume la calificación del oficio ante la omisión del ente territorial de expedir el informe de cargos.</p> <p>No se discute el depósito oportuno de la convención.</p>
SL 117 de 2020	Los trabajadores se vincularon el 22 de diciembre de 1982 y «noviembre» del mismo año.	Se accede al beneficio jubilatorio que reconoció el Decreto 074 de 1980, incorporado en la convención colectiva de trabajo firmada el 29 de enero y depositada el 31 siguiente; beneficio que se mantuvo en el acuerdo 2001-2003
SL 1160 DE 2020	El trabajador prestó sus servicios al Municipio de Medellín, desde el 23 de abril de 1984.	<p>Reconoce la pensión convencional de jubilación aplicando el Decreto 074 de 1980</p> <p>No se aporta nota de depósito de la Convención 2001-2003, pero las partes aceptan su existencia dentro del transcurso del proceso, ello implica que tal omisión de depósito quede por fuera de controversia, dado que su</p>

		desconocimiento trasgrediría el principio de lealtad procesal.
SL 4096 DE 2020	El trabajador desempeñó sus labores desde el 6 de marzo de 1990 hasta el 16 de abril de 2008	<p>La convención colectiva 2001-2003 fue depositada el 4 de septiembre de 2003, desconociéndose la fecha en que fue suscrita, pues su contenido no daba cuenta de ello, no siendo posible colegir que se haya depositado dentro de los 15 días siguientes a su firma como lo ordena el artículo 469 del CST,</p> <p>El Decreto 074 de 1980 no le es aplicable dado que la CCT de 1985, cláusula 5ª, salvaguardó los derechos pensionales de los trabajadores vinculados con anterioridad,</p> <p>No obstante CASA la sentencia para reconocer la pensión de jubilación proporcional por retiro voluntario contemplada en la cláusula 7ª de la CCT 1980</p>
SL1605 DE 2021	El trabajador laboró para el Municipio de Medellín del 8 de mayo de 1978 al 22 de diciembre de 2002,	La convención 2001-2003 no produce efectos, por no tener fecha de suscripción que permita determinar el deposito oportuno, pero es procedente reconocer la pensión convencional de jubilación aplicando el Decreto 074 de 1980.
SL5080 DE 2021	Los trabajadores prestaron sus servicios al municipio de Medellín, en su orden, entre el 21 de junio de 1983 al 28 de diciembre 2008 y desde el 7 de noviembre de 1983 al 28 de diciembre de 2008;	Reconoce la pensión con fundamento en el Decreto 074 de 1980

2.6.- CASO CONCRETO

En la causa bajo examen no se discute que entre el Municipio de Medellín y la organización sindical SINTRAMUMED, se suscribieron distintas convenciones colectivas de trabajo, que regularon la pensión de jubilación, entre ellas:

-El Decreto 021 de febrero 17 de 1978, se adopta la Convención Colectiva de Trabajo-1978- suscrita con el Sindicato de Trabajadores oficiales del Municipio de Medellín y el ente territorial, (folio 132 anexo 01);

-El Decreto 015 de enero 15 de 1979, se adopta la Convención Colectiva de Trabajo 1979, (folio 146 anexo 01)

-El Decreto 074 de enero 31 de 1980, se adopta la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con el Sindicato de Trabajadores oficiales SINTRAMUMED y el Municipio de Medellín. ((folio 169 anexo 01).

-La Convención colectiva 1985 (folio 59, documento 01 anexo 22).

La Cláusula 6 del Decreto 074 de 1980, establece que *“El Municipio de Medellín reconocerá el derecho de jubilación a sus trabajadores oficiales en los siguientes casos especiales: a) cuando hubiere laborado a su servicio durante veinticinco (25) años continuos o discontinuos, cualquiera sea la edad del trabajador. b) Cuando cumpla o haya cumplido veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos cualquiera sea la edad, siempre que haya estado dedicado a labores que se realicen a temperaturas anormales, socavones o en condiciones insalubres”*

Tal disposición se mantuvo vigente en la Convención Colectiva 1985 para los trabajadores oficiales vinculados con anterioridad a la expedición de la convención y posteriormente fue reproducida en el artículo 71 de la Convención Colectiva Trabajo celebrada entre el Municipio de Medellín y el sindicato de trabajadores municipales, para la vigencia del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, invocada como fuente del derecho reclamado, sin restricción alguna.

Respecto a la Convención 2001-2003, documento aportado a folios 22 al 87

del anexo 01, el Municipio de Medellín enfatiza que no se trata realmente de una nueva convención sino de un compendio de las normas convencionales vigentes en el ente territorial, tesis que igualmente sustentó el fallo que se revisa en apelación.

El citado argumento no puede ser acogido por la Sala, toda vez que del estudio de las pruebas glosadas al plenario, resulta diáfano que se trata de una verdadera convención colectiva, en primer lugar, el documento fue rotulado como *“Convención colectiva de trabajo celebrada entre el Municipio de Medellín y el sindicato de trabajadores municipales, para la vigencia del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003”*, y en su encabezado se lee *“se llegó al siguiente acuerdo, dentro del marco de negociación del Pliego de Peticiones 2001-2003 y para beneficio del interés general de la comunidad del Municipio de Medellín”* en segundo lugar, la misma fue depositada ante el Ministerio de Trabajo el 04 de septiembre de 2003, por el Subsecretario de Talento Humano del Municipio de Medellín como Convención Colectiva, explicando *“se remite copia de la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Municipio de Medellín y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín SINTRAMUMED para la vigencia comprendida entre el 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003”* (folios 21 Anexo 01) y en tercer lugar la misma fue DENUNCIADA como convención colectiva, por ambas partes el 30 de diciembre de 2003 ante el Ministerio de Trabajo. (véase folios 97 y 98 documento 3 del anexo 22 Respuesta.RequerimientoMintrabajo10-08-2022.)

Ahora no se desconoce que en el Acta de Acuerdo Final Convención 2001-2003, fechada diciembre de 2022 con nota de recibido del día 27 del mismo mes y año, cláusula 4, se dispuso: *“RECOPILACION DE NORMAS CONVENCIONALES. Quedó pactado de la siguiente forma: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma de la Convención Colectiva de Trabajo, se elaborará una recopilación, ordenación y actualización de todas las Normas Convencionales vigentes. El Municipio de Medellín imprimirá unos mil trescientos folletos de recopilación los cuales serán entregados al sindicato de Trabajadores del Municipio de Medellín. La codificación de las*

normas convencionales y el diseño de la portada de este folleto se acordará entre la Administración Municipal y el Sindicato de TRABAJADORES (Clausula 25 de la Convención colectiva 1995-1996) y se incluirá en dicha emisión la tabla salarial para el año 2003 “(Acta de Acuerdo Final- Negociación Pliego de Peticiones para la Convención colectiva 2001-2003. Carpeta contestación demanda), así como también se advierte de la lectura completa de la convención que el nuevo articulado se sucede de la referencia a normas convencionales anteriores; no obstante nada se opone a que las partes incorporen al texto convencional disposiciones convencionales preexistentes y tampoco es posible deducir que se trate del ejercicio de compilación de normas convencionales ordenado en la referida clausula cuarta del acuerdo final,, dado que no hay correspondencia entre el documento convencional y el compromiso acordado, nótese que en la misma convención 2001-2003, se reproduce, nuevamente, en el artículo 87 la pluricitada clausula, lo que claramente evidencia que tal obligación no estaba cumplida con el documento en referencia y por último, frente a este punto, no resulta razonable que el propio Municipio de Medellín, incurriera en un error de tal magnitud, como lo es confundir una recopilación de normas con una convención colectiva de trabajo.

La valoración anterior está en sintonía con lo adocetrinado en la sentencia SL 3045 de 2019 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien al referirse sobre este tópico, expuso: *“de donde se sigue que no tiene asidero la aseveración de que el documento que la contiene solo recoge un compendio y reproducción de textos convencionales anteriores, y que el artículo 71 es un calco de la cláusula 5 de la convención colectiva de trabajo firmada el 1 de marzo de 1985, en tanto surge paladino que es una estipulación autónoma e independiente.”*

Así las cosas, la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003 es una fuente formal de derecho.

El Depósito de la convención

En torno a los efectos jurídicos de la Convención 2001-2003, debe señalarse que el artículo 469 del Código Sustantivo de Trabajo, regula los requisitos formales de la convención, previstos como condición para la eficacia de la norma interna, así:

“ARTICULO 469. FORMA. La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el Departamento Nacional de Trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto.”

En el sublite, a pesar de ser claro para la Sala que la Convención Colectiva 2001-2003 es una norma autónoma, revisada el material documental aportado por el Ministerio de Trabajo en respuesta al requerimiento efectuado por el Despacho, que militan en el anexo 22, los cuales corresponden a todos los documentos efectivamente registrados en el historial de la organización sindical, se encuentra que la convención no tiene la fecha en la cual fue firmada, y si bien se aporta el sello de depósito de la Convención, folio 32 ibidem, en el cual se indica que la fecha de suscripción es el 19 de agosto de 2003 y la de depósito el 04 de septiembre de 2003, se advierte que la fecha de suscripción realmente corresponde a la fecha del oficio de remisión por parte del subsecretario de talento humano del Municipio de Medellín, el cual se radicó el 2 de septiembre de 2003 ante la dependencia ministerial. (folio 31 anexo 01)

Sobre esta omisión, también la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en la sentencia SL1605 de 2021, que a su vez rememora la

sentencia CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 37106, advirtiendo que “*si bien en el sello impuesto por dicha cartera ministerial, al adverso de la última página del aludido acuerdo, plasmó que fue suscrito el 19 de agosto de 2003 y seguidamente se advierte que fue depositada el 4 de septiembre de esa anualidad, no es menos cierto que en el texto de tal acuerdo, no aparece la fecha en que las partes convocantes del conflicto efectivamente lo suscribieron, con lo cual pone de manifiesto que no incurrió el Juez de alzada en el desacierto que le enrostra, pues ante la ausencia de la data de su celebración no es posible determinar que su depósito estuviera dentro del término previsto por la ley y, por tanto, no puede ser considerada para los efectos perseguidos por los recurrentes, en la forma como lo prevé el artículo 469 del CST.*”

De manera que resulta acertado el razonamiento de la juez de instancia, en cuanto a que no es posible determinar el depósito oportuno del acuerdo convencional y por lo tanto no puede reconocérsele efectos jurídicos, denotando, además, que el acta final del acuerdo tiene fecha de diciembre de 2002 y fue radicado ante el Ministerio el 27 de diciembre del mismo año.

Ahora no es posible pasar por alto que, como se anotó antes, la Convención 2001-2003 fue denunciada por ambas partes ante el Ministerio de Trabajo, y que el ente territorial objetó entre otros los artículos 71 y 74 relativos a la pensión de jubilación que reproduce el artículo 6 del Decreto 074 de 1980 (véase folios 96 y siguientes del anexo 22)y por ende se dio inicio a un nuevo conflicto colectivo, razón por la cual la convención tuvo vigencia hasta que fue reemplazada por los acuerdos plasmados en las actas finales de negociación 2004-2007 y 2008, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 479 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el Decreto 616 de 1954.

En este contexto no es posible aplicar la Convención Colectiva 2001-2003, y atender favorablemente el planteamiento del promotor del proceso.

Resta anotar que estudiada la aplicación directa del Decreto 074 de 1980, clausula 6, (convención 1980), idéntica en su texto al artículo 71 de la Convención Colectiva 2001-2003, por tratarse de un punto de derecho, la cual no fue denunciada, norma con fundamento en la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha reconocido en algunos casos la prestación, según los precedentes reseñados en las premisas normativas, se concluye que en el caso sub examine no es posible aplicar tal disposición, toda vez que no se cumplen los requisitos normativos, atendiendo a que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 1 de enero de 1985, indica en la cláusula 5:

“Pensión de Jubilación. Los trabajadores que se vinculen al Municipio de Medellín a partir de la firma de la presente Convención, estarán sometidos en su integridad al régimen de jubilación contempladas en las normas legales que regulan la materia. Los trabajadores vinculados a la firma de la presente Convención se regirán por la Cláusula Sexta del Decreto 74 de 1980.”

De manera que, al haberse vinculado el demandante al Municipio de Medellín, el 23 de diciembre de 1987, no le es aplicable tal régimen convencional y está sujeto al sistema general de pensiones.

De otra parte, si en aras de la discusión, se admitiera que son aplicables las fuentes normativas analizadas, cumple agregar que uno de los requisitos para causar la prestación convención lo haber prestado los servicios en labores expuestas a temperaturas anormales, en socavones o en condiciones insalubres y sobre el particular, el Municipio de Medellín, aportó con la contestación de la demanda el *Estudio de Cargos Insalubres* realizado por el Instituto del Torax, en el año 1993, el cual según oficio del 29 de noviembre de 1993, del Consejo Colombiano de Seguridad, contó con la interventoría de esta entidad, quien señala que “*el mayor efecto nocivo en el individuo está definido por las mayores exigencias de factores humanos y por las peores condiciones ambientales siendo este el considerado insalubre*”, (véase carpeta contestación demanda documentos 2 y 4), bajo esta

óptica revisado el estudio antes mencionado respecto al cargo desempeñado por el demandante, obrero de vías, no es posible arribar a la conclusión que éste tenga exposición a temperaturas anormales, trabajo en socavones o en condiciones insalubres, pues en el mismo se define como función principal “*arreglar vías en cuanto a cunetas, cordones y muros de contención*” y solo se clasifica en el nivel máximo el riesgo ambiental el de “intemperie”, delimitándose el riesgo de temperaturas extremas en el nivel 3 y en cuanto a los factores humanos solo está clasificado en nivel de riesgo 5 el “permanecer de pie”, aunado a que en el pluricitado informe se sella “***ninguno de los puestos analizados presenta este perfil***” (folio 77 y 256 documento 4 Contestación Demanda)

Finalmente, anota este juez plural que la línea jurisprudencia que cita el alzado, respecto a los aspectos específicos de controversia en este proceso, no guardan similitud fáctica, procesal y probatoria, con el caso puesto en conocimiento de esta Sala y por lo tanto no pueden ser tomados como precedente para derruir la decisión de primera instancia.

Corolario de lo anterior debe CONFIRMARSE la sentencia confutada.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de octubre de 2022, en el

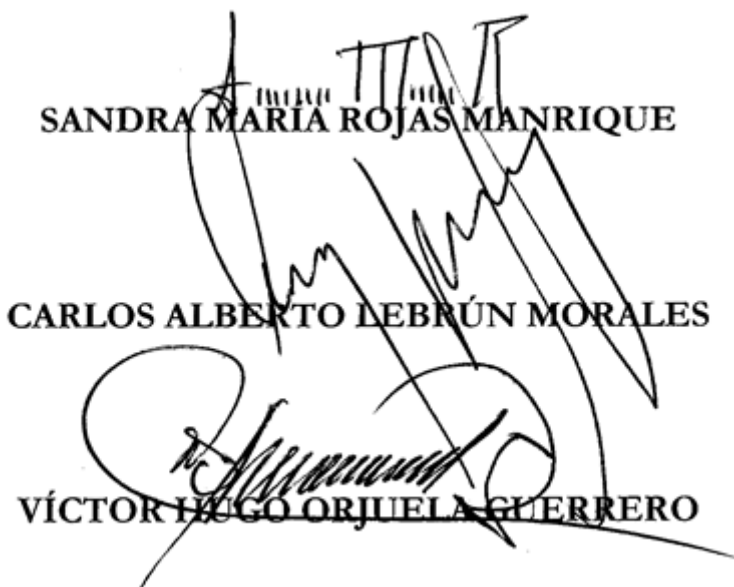
proceso ordinario instaurado por señor CARLOS ALBERTO ECHEVERRY VÁSQUEZ en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

2.- **COSTAS** en esta instancia a cargo del demandante, inclúyase como agencias en derecho de esta instancia la suma de \$1.160.000.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO DEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO